

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, veintidós (22) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **HÉCTOR JAIME ISAZA**
Demandado : **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**
Radicado : **05001 31 05 012 2019 00316 01**
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Seguridad Social – pensión invalidez de origen común, Principio de la condición más beneficiosa.
Decisión : Confirma Decisión Condenatoria.
Sentencia No : 23

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**,¹ profieren la siguiente decisión de fondo, previa deliberación, de conformidad con lo establecido en la **Ley 2213 del 13 de junio de 2022**², que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Solicita se condene a la demandada al pago de la pensión de invalidez desde la fecha de estructuración, intereses moratorios

¹ Conformada por las Magistradas **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL**, **CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO** y **MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente.

² “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”

o en subsidio indexación, costas procesales.

Hechos relevantes de la demanda:

Se afirma que **COLPENSIONES calificó la Pérdida de Capacidad Laboral (PCL) del demandante en un 79.76% estructurada el 15 de mayo de 2014** de origen común; solicitó la pensión de invalidez el 9 de noviembre de 2018, **siéndole negada por no cumplir con el requisito de las 50 semanas cotizadas en los últimos tres años anteriores a la estructuración de la invalidez; tiene 804 semanas de cotización de las cuales 525 fueron antes del 1° de abril de 1994;** está afiliado a la EPS SALUD TOTAL como beneficiario desde el 25 de octubre de 2013.

Respuesta a la demanda:

COLPENSIONES a través de apoderada judicial, aceptó lo referente al dictamen realizado al demandante y la negativa del reconocimiento de la pensión de invalidez; se opuso a las pretensiones formuladas y propuso en su defensa las excepciones denominadas inexistencia de la obligación de reconocer y pagar intereses de mora, improcedencia de la indexación de las condenas, prescripción, compensación, buena fe, imposibilidad de condena en costas.

Sentencia de Primera Instancia:

El **Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín**, mediante Sentencia del 18 de febrero de 2022, declaró que el demandante tiene **derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez** con fundamento en el artículo 6 del

Acuerdo 049 de 1990 **en aplicación del principio de la condición más beneficiosa**; condenó a COLPENSIONES al reconocimiento y pago de dicha prestación **a partir del 11 de julio de 2015**, con un **retroactivo** pensional en cuantía de **\$68.971.255** por el periodo comprendido entre el 11 de julio de 2015 y el 28 de febrero de 2022; continuar pagando una mesada pensional por valor de \$1.000.0000 teniendo en cuenta 13 mesadas anuales y los aumentos de ley; autorizó descontar del retroactivo los aportes en salud; declara parcialmente infundada la excepción de prescripción, y no probada la de compensación; indexación de las condenas impuestas; sin condena en costas.

Lo anterior considerando la *a quo*, que el demandante no cumple con el requisito de las semanas exigidas por la Ley 860 de 2003 y la Ley 100 de 1993 en su versión original; no obstante, **la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional posibilita la aplicación ultra activa del Acuerdo 049 de 1990, conforme al principio de la condición más beneficiosa** para aquellas personas en estado de vulnerabilidad, que superen el test de procedencia; cumpliéndose en este caso las condiciones que establece dicho Test por su Pérdida de Capacidad Laboral debida a las enfermedades que padece, es adulto mayor, no puede laborar por la discapacidad que presenta que le afecta el mínimo vital y vida en condiciones dignas y agotó las actuaciones pertinentes ante COLPENSIONES para obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez.

Recurso de Apelación apoderada de COLPENSIONES:

Solicita se revoque la Sentencia de Primera Instancia, afirmando que en criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, solamente se permite, conforme la condición más beneficiosa, la aplicación de la ley inmediatamente anterior, sin que el

demandante cumpla la densidad de semanas requeridas en la Ley 860 de 2003 y la Ley 100 de 1993; aunque tiene 300 semanas en cualquier tiempo, **no cumple con los requisitos del Test de Procedencia establecido por la H. Corte Constitucional** dado que no laboró desde el año 2000 al 2014 cuando le fue estructurada la PCL, sin saberse si durante este tiempo estaba en una situación vulnerabilidad, teniendo hasta el 15 de mayo de 2014 capacidad laboral plena; debe tenerse en cuenta la historia laboral actualizada según la cual, el demandante cotizó hasta el año 2000 constantemente; entre el año 2010 a 2013 cotizó 7.15 semanas que no le dan una expectativa legítima para la pensión reclamada; la tercera condición del Test es justificar razonablemente la imposibilidad de cotizar las semanas exigidas, pero el demandante en el interrogatorio de parte simplemente indica que dejó de cotizar en el año 2000, siendo sustentado por su familia sin tener PCL, decidiendo no cotizar hasta el 2014; no cumple la cuarta condición del Test porque la fecha de estructuración es del 15 de mayo de 2014 y apenas el 9 de noviembre de 2018 fue que solicito la pensión de invalidez.

Alegatos de conclusión:

La apoderada de COLPENSIONES reitera los argumentos expuestos en Primera Instancia.

Es así como, agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de **Apelación** y se conocerá en **Consulta** en favor de COLPENSIONES; de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15, 66 A y 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y Providencias de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia AL2912 del 11 de julio de 2018 Radicación 68716, AL469 del 3 de febrero de 2016 Radicado 71896, STL-7382 del 9 de junio de 2015 Radicado 40200, M.P. doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

Conflicto Jurídico:

El asunto jurídico a dirimir, radica en determinar si es procedente revocar la Sentencia condenatoria de Primera Instancia, analizándose si se cumplen los requisitos para el reconocimiento de la pensión de invalidez a favor del señor Héctor Jaime Isaza, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa; en caso de mantenerse la condena, se revisará en Consulta a favor de COLPENSIONES, las demás condenas.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente, confirmar la decisión de Primera Instancia; por las siguientes razones:

Revisada la prueba obrante en el expediente, se verifica que **el señor Héctor Jaime Isaza, fue calificado por COLPENSIONES** según dictamen de fecha 11 de julio de 2018, asignándole el **79.76% de PCL**, de origen común, con **fecha de estructuración el 15 de mayo de 2014** (folios 8 a 14 archivo 02); la norma vigente para determinar el derecho a la pensión de invalidez es la Ley 860 de 2003, conforme la cual es necesario tener cotizadas 50 semanas en los tres años anteriores a la

estructuración; requisito que no cumple el demandante conforme se desprende de la historia laboral actualizada en la cual puede observarse que entre el 15 de mayo de 2011 y el 15 de mayo de 2014 tiene 0.57 semanas (Documento GRP-SCH-HL-66554443332211_1531-20190626100445 archivo 04).

El demandante tampoco cumple las condiciones exigidas por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, para aplicar el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 original, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, en aquellos eventos que la estructuración de la invalidez ha sucedido al amparo de la Ley 860 de 2003, toda vez que solo es posible diferir los efectos de la mencionada ley hasta el 26 de diciembre de 2006, esto es, por 3 años luego de su vigencia (SL2358 de 2017, reiterada en SL5657 de 2021) y en este caso, la estructuración de la invalidez se dio en el año 2014, por fuera del límite temporal fijado por el Órgano de Cierre de esta especialidad.

Condición más beneficiosa con salto normativo para acudir al Decreto 758 de 1990 que aprobó el Acuerdo 049 de 1990; según línea jurisprudencial de la H. Corte Constitucional:

Aún para la fecha en que se promovió la demanda (20 de mayo de 2019) y cuando se profirió la Sentencia de Primera Instancia, la H. Corte Constitucional permite por condición más beneficiosa, el salto normativo, para personas que por ejemplo en vigencia de la Ley 860 de 2003, hubieren estructurado la pérdida de capacidad laboral que le diera la condición de inválidos, aplicando el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, si cumplían los requisitos allí establecidos, sin exigir ningún otro condicionamiento.

En el transcurso del proceso, **la H. Corte Constitucional**

mediante Sentencia SU 556 del 20 de noviembre de 2019, ajustó el alcance del principio de la condición más beneficiosa en pensiones de invalidez, indicando que la regla fijada en la Sentencia SU-442 de 2016, según la cual este principio da lugar a que se apliquen de manera ultractiva las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 a aquellos afiliados cuya invalidez se hubiese estructurado en vigencia de la Ley 860 de 2003, solo es aplicable a personas en situación de vulnerabilidad, esto es, aquellos que superen las exigencias del siguiente “*test de procedencia*”:

Test de procedencia	
Primera condición	Debe acreditarse que el accionante, además de ser una persona en situación de invalidez, pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en una situación de riesgo derivada de, entre otras, alguna de las siguientes condiciones: (i) analfabetismo, (ii) vejez, (iii) pobreza extrema, (iv) cabeza de familia, (v) desplazamiento o (vi) padecimiento de una enfermedad crónica, catastrófica, congénita o degenerativa.
Segunda condición	Debe poder inferirse razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensión de invalidez afecta directamente la satisfacción de las necesidades básicas del accionante, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas.
Tercera condición	Deben valorarse como razonables los argumentos que proponga el accionante para justificar su imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por las disposiciones vigente al momento de la estructuración de la invalidez.
Cuarta condición	Debe comprobarse una actuación diligente del accionante para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez.

Conforme a las **Sentencias SU 068 de 2018, SU 354 de 2017, SU 406 de 2016 de la H. Corte Constitucional, el precedente vertical tiene carácter vinculante para los operadores judiciales, de manera general e inmediata**, siendo prevalente en materia de interpretación de los derechos fundamentales y de la Constitución en general, buscando con ello materializar el respeto de los principios de la igualdad, la supremacía de la Carta Política, el debido proceso y la confianza legítima, mandatos que obligan a que los Jueces tengan en cuenta tales decisiones, al decidir los asuntos sometidos a su competencia.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral, que de acuerdo a la prueba obrante en el expediente, **el demandante cumple los requisitos establecidos en estas reglas**, así:

Cumple con la primera condición, por **ser persona en situación de invalidez**; está ubicado en el **grupo de “vejez”**, al tener **63 años de edad**, ya que nació el 22 de agosto de 1959 (folio 32 archivo 02); **presenta también delicado estado de salud**, pues conforme el informe médico del 12 de junio de 2018 de emitido por *FRESENIUS MEDICAL CARE S.A.* padece de *insuficiencia renal crónica Enfermedad renal crónica estadio 5, enfermedades inflamatorias de la próstata enfermedad inflamatoria de la próstata, no especificada, hipertensión secundaria hipertensión secundaria a otros trastornos renales, hiperplasia de próstata benigna* (Documento GRP-HCC-AC-2018_7004678-20180618020136 archivo 04); en el dictamen de PCL realizado por COLPENSIONES, se valoraron deficiencias por *Paraplejia, no especificada, Hipertensión esencial (Primaria), insuficiencia renal terminal*, señalándose que “...era vendedor de tintos laboraba independiente no cotiza al afp hace 10 años...” igualmente se señala “...requerimiento de tratamientos continuos y permanentes (hemodialisis (sic) 3 veces por semana) (...) con requerimiento de la ayuda de otros para el cuidado de la propia salud (...) con severas limitaciones para el desplazamiento (uso de silla de ruedas)...”, **indicándose que la PCL obedece a una enfermedad de tipo catastrófica, alto costo, ruinosa**; consultado el Registro Único de Afiliados del Sistema Integral de Información de la Protección Social, base de datos que es de acceso público, se encontró que el demandante aparece afiliado al Sistema de Salud en Salud Total EPS-S a través del régimen contributivo desde el 25 de octubre de 2013, en calidad de beneficiario; aparece como inactivo en COLPENSIONES registrando vinculación al programa Beneficios Económicos

Periódicos BEPS el 15 de septiembre de 2017 con la misma fecha de ultimo beneficio (Archivo 10); infiriéndose de las anteriores circunstancias que **goza de especial protección constitucional**, según lo señalado en el artículo 13 de la Constitución Política, cobijando especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.

Acredita la segunda condición: puesto que, con la prueba obrante, puede inferirse razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensión de invalidez, afecta la satisfacción de las necesidades básicas del demandante, como el mínimo vital y la vida en condiciones dignas, ya que se trata de persona sin capacidad física para laborar, sin ingresos propios que le permitan una estabilidad económica. Al respecto, en el interrogatorio de parte, manifestó que no se dedica a nada debido a su discapacidad, se moviliza en silla de ruedas, tiene insuficiencia renal y le hacen tratamiento de diálisis; como no trabaja desde el año 2000 aproximadamente, deriva su sustento de las ayudas que algunas veces le brindan sus familiares.

Supera también la tercera condición, al advertirse que la imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por la disposición vigente al momento de la estructuración de la invalidez, pudo obedecer a situaciones objetivas y razonables; teniendo en cuenta que se trata de una persona que después del año 2000 no tuvo ninguna relación laboral continua y permanente, bajo la cual pudiese efectuar cotizaciones al Sistema de Pensiones, luego de lo cual, laboró de manera independiente vendiendo tintos según se dice en el Dictamen de PCL, alcanzando a aportar tan solo 7.15 semanas entre los años 2010 y 2013 conforme se extrae de la historia laboral.

Por último, **como cuarta condición, se observa**

actuación diligente del demandante, en el trámite de la solicitud de la pensión de invalidez, atendiendo a que fue notificado del Dictamen de PCL el 27 de julio de 2018 (folio 7 archivo 07); solicitó la pensión el 9 de noviembre de 2018 (Documento *GRP-FSP-AF-2018_14286281-20181109043051* archivo 04); le fue negada mediante Resolución del 9 de febrero de 2019 –notificada el 13 de febrero de 2019 (folio 15 archivo 02)-; presentando la demanda el 20 de mayo de 2019, resultando evidente la diligencia en todas estas actuaciones.

Al cumplir las cuatro (4) exigencias del *test de procedencia*, **se procede a verificar el cumplimiento del requisito de semanas** conforme al Decreto 758 de 1990, **en aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa, con salto normativo**, como lo permite la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional:

Conforme a la historia laboral aportada por COLPENSIONES actualizada al 26 de junio de 2019, **el señor Héctor Jaime Isaza acredita 804.57 semanas cotizadas**, entre el 31 de marzo de 1978 y el 3 de junio de 2013; **de las cuales 486,28 fueron cotizadas en vigencia el Acuerdo 049 de 1990**, cumpliendo con lo exigido en el artículo 6° del Decreto 758 de 1990, que exige haber cotizado para los seguros de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época.

Así las cosas, el señor Héctor Jaime Isaza tiene derecho al reconocimiento de la pensión por condición más beneficiosa, confirmándose la decisión de Primera Instancia en este aspecto.

Consulta en favor de COLPENSIONES:

En lo que tiene que ver con el monto de la pensión, atendiendo al ingreso base de cotización reportado por el afiliado en la historia laboral y conforme lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo 049 de 1990, la mesada pensional equivale al mínimo legal mensual vigente, con derecho a 13 mesadas al año, por haberse causado en forma posterior al 31 de julio de 2011, conforme al Parágrafo Transitorio 6° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, tal como lo determinó la *a quo*.

En cuanto **al disfrute de la pensión de invalidez** de acuerdo a lo indicado en el inciso final del artículo 40 de la Ley 100 de 1993, el disfrute y causación **se da a partir de la fecha de estructuración de tal estado -que en este caso fue el 15 de mayo de 2014-.**

En lo relativo a la **prescripción**, cuando se trata de pensión de invalidez, el término empieza a correr a partir del dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral, que en este caso se realizó el 11 de julio de 2018 y la demanda se presentó el 20 de mayo de 2019, sin haber transcurrido el término prescriptivo de tres años, de conformidad con lo establecido en el artículo 151 del Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social. Habiendo declarado la *a quo* parcialmente probada la excepción de prescripción de las mesadas anteriores al 11 de julio de 2015, lo que no fue acertado, pero como no fue motivo de apelación por la parte demandante y al conocerse tal aspecto en esta instancia en Consulta a favor de COLPENSIONES, no hay lugar a modificar la condena, en un sentido que resulte más gravoso para la entidad.

El retroactivo pensional calculado por el Juzgado en la suma de \$68.971.255 por el periodo comprendido entre el 11 de julio de 2015 al 28 de febrero de 2022, es el que corresponde; sin que haya lugar a modificarlo en este Instancia. Por otro lado, no se verifica que la entidad en algún momento le hubiese pagado dineros al demandante que dé lugar a compensación.

En cuanto a la indexación de las condenas, resulta ajustada a derecho, ya que simplemente representa la actualización del valor adquisitivo que tuvieron esas mesadas debido pérdida del valor adquisitivo de la moneda.

Así las cosas, **esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente, confirmar la Sentencia de Primera Instancia.**

COSTAS:

No se condenará en Costas en esta Segunda Instancia teniendo en cuenta que COLPENSIONES negó la pensión de invalidez con fundamento en la normatividad legal aplicable y la condena que se le impone, obedece a la aplicación de precedente jurisprudencial de la H. Corte Constitucional surgido durante el trámite del proceso.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL,** administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **CONFIRMA**, la Sentencia de Primera Instancia, de fecha y procedencia conocidas, que se revisa por vía de Apelación y en Consulta en favor de COLPENSIONES; de

conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

SEGUNDO: Sin condena en Costas en Segunda Instancia; según lo indicado en la parte motiva.

TERCERO: Lo resuelto se notifica por **EDICTO**, en el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma el Acta por quienes en ella intervinieron.

Las Magistradas,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SECRETARIA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL**

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **HÉCTOR JAIME ISAZA**
Demandado : **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**
Radicado : **05001 31 05 012 2019 00316 01**
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Seguridad Social – pensión invalidez de origen común, Principio de la condición más beneficiosa.
Decisión : Confirma Decisión Condenatoria.
Sentencia No : 22

FECHA SENTENCIA:

22 de febrero de 2023

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Fijado hoy viernes 24 de febrero de 2023 a las 8:00 Am Desfijado hoy viernes 24 de febrero de 2023 a las 5:00 Pm

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS
Secretario